



Liliana Cortés

Directora de Hogar de Cristo



Inequidad desde la sala cuna

La desigualdad en la educación chilena comienza mucho antes de la PSU, del Simce o de la enseñanza básica. Comienza en la sala cuna, en una diferencia silenciosa pero profunda: no todos los jardines infantiles y salas cuna reciben el mismo apoyo del Estado. Hoy, en Chile, existen jardines infantiles administrados por Junji o por Fundación Integra, ambos estatales, y también jardines administrados por terceros –fundaciones, municipios y organizaciones sociales– que funcionan “Vía Transferencia de Fondos” (VTF). Todos atienden al mismo grupo objetivo: niños y niñas del 60% más vulnerable del país. Todos deben cumplir exigencias técnicas, pedagógicas y de cuidado similares. Pero no todos reciben los mismos recursos. Y la diferencia es sustantiva.

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, en un jardín infantil “tipo” que atiende cerca de cien párvulos, el financiamiento por niño alcanza los \$429.942 en establecimientos JUNJI de administración directa y \$402.887 en Integra. En cambio, en los jardines VTF el aporte cae a \$250.647 por párvulo.

La paradoja es aún más evidente cuando se observa la distribución del sistema. Los jardines Junji atienden el 27% de la matrícula total y reciben el 43% del presupuesto. Los jardines VTF, en cambio, atienden el 38% de los niños y niñas, pero reciben solo el 26% de los recursos.

El caso de Hogar de Cristo refleja esta realidad. Nuestra institución sostiene una red de 35 salas cuna y jardines infantiles VTF distribuidos a lo largo del país, con capacidad para cerca de 2.800 niños y niñas. Cerca del 90% del financiamiento se ocupa en remuneraciones, dejando muy poco margen para materiales pedagógicos, capacitación de equipos o fortalecimiento del trabajo con familias.

A esto se suma una lógica de financiamiento muy frágil: para recibir el total de los recursos, los jardines deben mantener al menos un 75% de asistencia promedio.

En invierno, cuando aumentan los virus respiratorios y las ausencias infantiles, esa exigencia termina afectando a los establecimientos que trabajan en contextos más complejos y vulnerables.

Mantener un sistema donde el financiamiento depende más de la estructura administrativa que de las necesidades reales de los niños no solo es injusto: es una mala política pública. La igualdad de oportunidades empieza mucho antes de lo que solemos creer. Empieza en la primera infancia. Y ahí no debería haber diferencias.